

0015/2021

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial “Boletín Oficial del Estado” para adaptarlo al tablón edictal judicial único, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en relación con el artículo 57.1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD), cúmpleme informarle de lo siguiente:

Conforme a la Exposición de Motivos del proyecto, el artículo 236.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), prevé que la publicidad de los edictos se realice a través del Tablón Edictal Judicial Único, previsión legal que ha sido completada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que, entre otros aspectos, modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, para establecer las características esenciales del citado Tablón. Así, la nueva redacción dada a la Ley 18/2011 establece que el Tablón Edictal Judicial Único (TEJU) será publicado electrónicamente por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y que dicha Agencia pondrá a disposición de los órganos judiciales un sistema completamente automatizado de remisión y gestión de edictos. El objetivo del Tablón Edictal Judicial Único sería pues la plena informatización y unificación de la publicación de resoluciones y comunicaciones judiciales, acabando con la dispersión en tabloneros de anuncios y distintos boletines oficiales, reforzando la simplicidad de este trámite y las garantías de las partes. La modificación configura un nuevo Suplemento del BOE denominado “Suplemento del Tablón Edictal Judicial Único”, que sigue una regulación similar, que no idéntica, a la

que ya se estableció respecto del Tablón Edictal Único (TEU) por el Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, que modificaba igualmente el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado».

Nos encontramos así, desde la perspectiva de la normativa de protección de datos personales, ante un tratamiento de datos personales, dado que por un lado el contenido del edicto judicial contendrá “datos personales”, esto es, cuando se refieran a personas físicas, información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»), definiéndose “tratamiento de datos personales” como *cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, **comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso**, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;*

Como base jurídica de este tratamiento, esta AEPD considera que sería aplicable al menos los apartados c) o e) del RGPD, por cuanto es una obligación impuesta por las distintas leyes procesales la notificación, en determinados casos, a los interesados de los actos procesales de su interés por medio de edictos o en tabloneros de anuncios, si bien, como precisa la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque sea “*como último y extremo recurso*”, pero en cualquier caso, añade la Exposición de Motivos del proyecto presentado a informe, “*no se trata simplemente de cumplir con el requisito formal de dar a conocer una determinada resolución o actividad jurisdiccional sino de poner medios adicionales para facilitar que el destinatario del acto procesal publicado tenga noticia de su existencia, reforzando el carácter de garantía procesal que supone la comunicación edictal*”.

Por ello, la norma cuyo proyecto se presenta merece una opinión positiva de esta AEPD, en cuanto favorece un acceso real a las notificaciones de actos procesales para los interesados, que no sea meramente ilusoria, o cuando menos de muy difícil acceso efectiva, como hasta ahora.

No obstante, cabe hacer algunas precisiones.

(i) En el artículo 2, apartado Cuatro, se añade un apartado 5 al art. 14 del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, paralelo al ya existente apartado 4 respecto del Tablón Edictal Único. Dicho paralelismo no es completo, en primer lugar porque la restricción al uso “*de la información publicada en el suplemento del Tablón Edictal Judicial Único*” (TEJU) parece más estricto que el contenido en el Tablón Edictal Único (TEU). Mientras que respecto del TEU el apartado 4 del art. 14 del RD 181/2008 dice que “el código de verificación” (que debe ir incluido en cada página, art. 4.3 RD 181/2008) solamente podrá ser conservado, almacenado y tratado por el interesado o su representante, así como por los órganos y Administraciones que puedan precisarlo para el ejercicio de las competencias que les corresponden, en el apartado 5 dicha restricción al tratamiento no se ciñe al “código de verificación”, sino a toda la información publicada en el Suplemento del Tablón Edictal Judicial Único. Ello cuenta con la opinión favorable de esta AEPD, pero sugiere que ese mismo régimen se extienda al apartado 4, respecto de las notificaciones contenidas en el TEU, de modo que se restrinja en dicho apartado 4 no sólo el uso “del código de verificación”, sino toda la información que se publique tanto en el TEU, como en el TEJU, por cuanto ello sería más acorde con el principio de limitación de la finalidad y de minimización previstos en el art. 5.1, letras b) y c), RGPD, dado que si bien los actos que se notifican en el TEU y en el TEJU son distintos, pueden afectar también a la privacidad y al derecho de protección de datos personales de los interesados (por ejemplo, notificación de una sanción en el TEU, o de un procedimiento recaudatorio, etc.).

(ii) En segundo lugar, la información en el TEJU, al igual que en el TEU, estará disponible únicamente tres meses. Ello también merece una respuesta favorable de esta AEPD. Para el acceso posterior a la información contenida en dichos anuncios o notificaciones será necesario contar con el código de verificación. Al igual que se ha comentado en el epígrafe anterior, el nuevo párrafo a añadir se refiere a “medidas para evitar el acceso a la información”, frente al texto del párrafo 4, que hace referencia a “medidas orientadas a evitar la indexación y recuperación automática de los códigos de verificación”. Esta AEPD sugiere que, al ser más amplia, y por tanto más favorable al derecho del interesado a la protección de sus datos personales, se modifique también el apartado 4 para que esas medidas tendentes a evitar la indexación se

extiendan no sólo al “código de verificación”, sino a toda la información publicada en el TEU y en el TEJU.

(iii) Sin perjuicio de lo anterior, esta AEPD considera conveniente mencionar que para el acceso a la información publicada, una vez transcurridos los tres meses, basta con disponer del “código de verificación”, sin que parezca ser necesario ningún otro requisito. Así, cualquier que disponga del código podrá acceder a la información tras ese período. Cabe recordar que el Consejo de Estado, en su Dictamen 291/2015, de 13 de mayo de 2015, sobre Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del Diario Oficial “Boletín Oficial del Estado” para adaptar dicha regulación al TEU ya expuso, refiriéndose al apartado 4 del art. 14, que *[a]un cuando no se objeta la regulación contenida en este nuevo apartado, debe apuntarse la dificultad de articular las referidas medidas de control de acceso, habida cuenta de que el código de verificación debe figurar “en todas y cada una de las páginas” del BOE (artículo 4.3 del Real Decreto 181/2008, en la redacción prevista en el apartado uno del artículo único del proyecto), lo que determina que sea accesible para todos aquellos que consulten el BOE desde el momento en que se publique el correspondiente anuncio. No se establece el modo en que pueda limitarse la conservación, almacenamiento y tratamiento de dichos códigos por sujetos distintos de los que, de conformidad con el nuevo apartado 4 del artículo 14, están autorizados a efectuar dichas operaciones, como tampoco se prevén las eventuales consecuencias que la contravención de dicha regla pueda comportar.*

A tal fin, esta AEPD sugiere que el acceso al apartado de verificación de códigos en la página web de la AEBOE esté sujeta a identificación mediante firma electrónica (u otro sistema fiable) que permita conocer, cuando menos, quién accede a dicha funcionalidad para poder eventualmente comprobar su legitimación para el tratamiento de dichos datos. Esta medida, adoptada por algunas Administraciones Públicas, serviría para, cuando menos, paliar la dificultad expuesta por el Consejo de Estado en su Dictamen citado 291/2015.

(iv) En el art. 17, párrafo primero (cuya modificación no se ha propuesto) se sugiere modificar la referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (hoy -al menos parcialmente- obsoleta) por la de “*normativa de protección de datos personales*”, que permite mediante una sola expresión aglutinar la referencia al RGPD, la LOPDGDD, y cualquier modificación o sustitución posterior de estas.